

# La experiencia nacional-popular

Eduardo Valenzuela  
Investigador de SUR

La categoría "pueblo" —cuya centralidad en el caso latinoamericano está fuera de dudas— adquiere verdadera significación recién en nuestra historia moderna, con el desmoronamiento de los regímenes oligárquicos y la constitución de los modelos llamados "nacional-populares". Tales modelos se propusieron dos objetivos históricos: la construcción del Estado, frenada por la dominación oligárquica; y la integración de masas excluidas, que usualmente escapaban ya de la servidumbre campesina. Tales objetivos estaban entrelazados: el Estado se construía a través de una política de participación popular e, inversamente, las masas lograban la condición de sujetos a través del Estado. Esta particular conjunción entre Estado y masas es lo que produce la categoría "pueblo" en la experiencia nacional-popular.

¿Cómo se produce realmente esta conjunción? La sociología siempre ha sido sorprendida por la vacuidad del discurso nacional-populista. Por una parte, el "nacional-populismo" no contiene ningún discurso específicamente populista, vale decir, no reconoce la existencia de un sujeto popular preconstituido frente al Estado. La acepción alemana de "pueblo-nación" le es usualmente extraña: en efecto, la tentativa de construir la noción de "pueblo" en la cultura, y específicamente en la lengua, está casi siempre ausente, a pesar de que el nacionalismo cultural aparece intermitentemente como principio de legitimidad. Todavía más remota es su asociación con el populismo ruso y la contraposición entre las tradiciones comunales de la aldea campesina (*obshina*) y el Estado modernizador, pese a que no faltan los intentos por proteger al *petit-peuple* de los rigores de la modernización capitalista, por ejemplo en la política agraria de Cárdenas o en los escritos de Haya de la Torre. Tampoco el nacional-populismo elabora un discurso específicamente democrático: el reconocimiento del "pueblo" como sujeto de derechos anteriores al Estado falta por completo en el discurso nacional-popular. El nacional-populismo no tiene nada de jacobinismo: moviliza y extiende la participación política de las masas populares, pero esta participación tiene siempre un carácter heterónomo, se valida únicamente a través de la presencia de líderes políticos situados por encima del mundo popular. El pueblo no está constituido, pues, de un modo democrático como apropiación de un derecho de ciudadanía anterior al Estado.

Todos los modelos nacional-populares se validan a través de su apelación al "pueblo". Precisamente en esto se distinguen del modo de dominación oligárquico y el de las ideologías liberales, que fundan el Estado al margen de esta apelación. Pero

la noción de "pueblo" no aparece nunca plenamente constituida en el discurso nacional-populista: el "pueblo" existe sólo como masas confinadas en un estado de naturaleza ("miseria") y desprovistas de lenguaje (como no sea la violencia), cuyo principio de organización debe provenir desde fuera.

Esta vacuidad del discurso nacional-popular llevó a la sociología a eliminar el concepto de "pueblo" del análisis: un sujeto no constituido discursivamente sólo puede ser un sujeto ilusorio, abstracto, un artificio demagógico sin consecuencias reales. Las diferentes teorías sobre el nacional-populismo, elaboradas en su momento de declive y descomposición, coincidieron en este punto: *ninguna reconoce la existencia de un sujeto específicamente constituido en la experiencia nacional-popular.*<sup>1</sup>

## TEORIAS SOBRE EL NACIONAL - POPULISMO

En el caso de las teorías de origen marxista, los regímenes nacional-populares fueron vistos como una variante latinoamericana del bonapartismo. El "bonapartismo" surgiría en una situación de equilibrio catastrófico de la lucha de clases, en la cual el Estado, aparentemente situado por encima de la sociedad, aseguraría un mínimo de cohesión y estabilidad. En el marco de una teoría de las clases, esta autonomía del Estado se revela puramente ilusoria: el Estado bonapartista no es más que un instrumento de neutralización de la lucha de clases y, en particular, de control del movimiento obrero. El nacional-populismo fue visto de esta manera como una forma particular del Estado burgués, destinado a frenar el ascenso revolucionario del proletariado.<sup>2</sup> La tesis "bonapartista" supone no sólo la existencia previa de las clases, sino también un período previo de intensos antagonismos sociales y de lucha catastrófica por el poder —como ocurrió en la Francia revolucionaria de 1848-1851— lo que es manifestamente falso en el caso latinoamericano. Una tesis más matizada fue sostenida por autores como Weffort (1970 y 1978), quien define los regímenes nacional-populares como "Estados de compromiso", o Ianni (1973 y 1975), quien habla de "pacto populista". En este caso no es el exceso, sino la debilidad de la estructura de clases, y en especial de la burguesía industrial incapaz de resolver por su cuenta la crisis oligárquica, lo que obliga a constituir un compromiso amplio y heterogéneo entre las clases. El Estado nacional-popular fue visto entonces como expresión de un consenso precario e inestable, que recoge los diferentes intereses sociales compatibles con un proyecto de industrialización nacional. La noción de "compromiso" o "pacto" supone, otra vez, que las clases están preconstituidas como tales frente al Estado. Weffort, es cierto, sostiene una opinión más cercana a Germani tratándose de la clase obrera: la lógica del compromiso de clases está amortiguada por una lógica política. El nacional-populismo se define también por una "política de masas", vale decir, por una conjunción específica entre Estado y masas (mediatizada por liderazgos carismáticos), que fundan la capacidad y fortaleza del Estado para administrar el compromiso de clase. El Estado no aparece como un simple escenario donde se alojan las clases, sino que constituye una fuerza específica, cuya legitimidad proviene de su capacidad de concitar la adhesión de las masas urbano-populares. Ianni, y también Murrin y Portantiero (1971), en cambio, que acentúan la interpretación marxista del

1. En este artículo nos referimos exclusivamente a la constitución del mundo popular como sujeto político: esto no quiere decir que la política sea el único ni el principal mecanismo de constitución de un sujeto.
2. Especialmente entre los teóricos marxistas de la dependencia; por ejemplo, Dos Santos (1972).

problema, desvalorizan constantemente esta conjunción entre Estado y masas. Murmis y Portantiero intentan demostrar que la integración popular en el Estado se realiza en cuanto "clase", lo que se verifica por la participación protagónica del sindicalismo preorganizado por los socialistas en la experiencia peronista. Ianni, por su parte, que admite la debilidad inicial de la clase obrera, se esfuerza por demostrar la obsolescencia de la "política de masas" del nacional-populismo y el inevitable despliegue del antagonismo de clases, en el marco de las contradicciones estructurales de un proyecto de industrialización capitalista dependiente. El común denominador del análisis de clase es éste: la experiencia nacional-popular no constituye jamás un sujeto, ya sea porque éste se encuentra preconstituido frente a dicha experiencia, ya sea porque la conjunción Estado-masas se revela inevitablemente espuria, pasajera y superficial.

La teoría de la modernización, por su parte, aunque pone en el centro de su análisis la relación específica entre Estado y masas, llega a conclusiones parecidas. Para Germani (1971 y 1973), que construye el concepto a partir del análisis del peronismo argentino, el nacional-populismo es el fruto de una asincronía entre el proceso de movilización social (inducido por la rápida urbanización e industrialización de la preguerra) y la ausencia de mecanismos institucionales de integración (debida a la persistencia de regímenes conservadores en este caso). El concepto de "movilización" es la clave para comprender el fenómeno nacional-popular: éste designa un efecto de "desplazamiento" —de abandono de las pautas tradicionales de comportamiento, lo que sería característico de las masas migrantes de origen rural, recientemente incorporadas a la vida urbana y al trabajo industrial— y un efecto de "disponibilidad", provocado por la falta de vehículos institucionales de integración, especialmente de una tradición obrera legitimada y de un sistema político abierto. Las masas quedan así disponibles para la manipulación de las élites, que a su turno están sometidas también a procesos de desplazamiento —o "incongruencia de estatus" según Di Tella (1973)— y disponibilidad, vale decir, no integradas adecuadamente al sistema institucional (el caso de los militares, por ejemplo). El nacional-populismo se sitúa, pues, en este marco de movilización prematura de las masas o de "exceso de participación" que resulta, al contrario de lo que sostenía la tesis anterior, de la ausencia de clases organizadas y del correspondiente sistema de representación política. Dicho de otro modo, el nacional-populismo surge en una situación de masas en que las nociones de "clase" o de "ciudadanos" no alcanzan a constituirse realmente.

Germani nunca define al nacional-populismo como un modelo institucional: es un fenómeno de movilización social no regulado institucionalmente, que descansa, por lo tanto, en la fusión entre un líder carismático y masas desorganizadas o traumatizadas por los efectos de la transición. Los regímenes nacional-populares, por una parte, no provocan reformas económicas importantes (especialmente no realizan la reforma agraria) ni son portadores consecuentes de un proyecto de industrialización nacional; por otra, no permiten una participación política efectiva de las masas que ellos mismos movilizan. Se definen, por el contrario, por un autoritarismo a ultranza y por su ineficiencia económica. El nacional-populismo, en efecto, no constituye ni "clase" ni "ciudadanos": se trata de un fenómeno puramente de masas que deja las cosas en su punto de partida.<sup>3</sup>

3. Germani se cuida, de todos modos, de distinguir entre nacional-populismo y fascismo: el primero se funda en una movilización de carácter primario, vale decir, de sectores populares que emergen de una sociedad tradicional;



Masas desorganizadas que el nacional-populismo es incapaz de organizar, o clases cuya presencia *ex ante* o *ex post* tampoco el nacional-populismo puede realmente ocultar, la sociología ha negado sistemáticamente la existencia de un sujeto en dicha experiencia. La noción de "pueblo" no adquiere nunca un estatuto sociológico: es solamente un recurso demagógico para realizar la voluntad de poder de líderes inescrupulosos. Es fácil comprender los motivos de esta visión: las ideologías tanto "modernizadoras" como "revolucionarias" de los años sesenta compartieron el propósito de superar el nacional-populismo e imaginaron que no sería difícil. "Desperonizar a las masas" fue una voluntad común, ya sea para desplegar los antagonismos de clase, ya sea para provocar procesos de incorporación democráticos de las masas marginadas. El nacional-populismo no podía ser sino un fenómeno transicional o espurio que apenas podría detener el ascenso ineluctable de la clase obrera como clase revolucionaria o la necesaria evolución de las sociedades hacia una modernidad democrática.

La fortaleza del nacional-populismo, sin embargo, obligó a reconsiderar esta hipótesis optimista de los años sesenta. La constitución de "clase" o "ciudadanos" se reveló una empresa más difícil de lo que aparecía a primera vista. El segundo auge del peronismo argentino en los años setenta (esta vez con la escandalosa participación de las clases medias) desmintió tanto una, como otra, de las profecías de entonces. Ni "clase", ni "ciudadanos": lo que continuamente reaparecía era una movilización popular según el formato nacional-populista, que sólo los regímenes autoritarios podían eficazmente detener. Tal vez, en efecto, la experiencia nacional-popular haya sido una experiencia constituyente de un sujeto –"pueblo"– lo que le brinda su persistencia y consistencia históricas.

Dos han sido las teorías que pretenden dar cuenta de la naturaleza específica del sujeto que se constituye en el nacional-populismo. La primera está contenida en el conocido artículo que Laclau (1986) dedica al asunto.<sup>4</sup> Laclau se propone explícitamente revalorizar el discurso populista aprisionado dentro del discurso de clase en las versiones corrientes del marxismo. "El populismo –según su definición– consiste en la presentación de las interpelaciones popular-democráticas como conjunto sintético-antagónico respecto de la ideología dominante" (Laclau 1977: 201). El discurso populista –o "popular democrático"– consiste en un conjunto de contenidos discursivos que despliegan el antagonismo "pueblo-bloque en el poder" (o, esquemáticamente, Estado-masas). El propósito teórico en que está inscrita esta definición no interesa demasiado en esta ocasión. Baste recordar que Laclau está interesado en evitar el reduccionismo de clase en el análisis de las ideologías, y salvar específicamente la ineficiencia ideológica del discurso marxista tradicional. En este sentido, propone revisar la conexión entre ideología y clase en una doble dirección: primero, reconociendo la especificidad de la lucha ideológica-política, definida por la

el segundo, en una movilización secundaria, esto es, de clases previamente incorporadas sometidas a desplazamientos hacia abajo (eproletarización de las clases medias). Dentro del esquema evolucionista de Germani, esto da una coloración distinta a ambos regímenes: el autoritarismo nacional-popular contiene elementos progresistas, es una especie de propedéutica democrática que ofrece a las masas un espacio de participación aunque sea dependiente; el fascismo, en cambio, es pura regresión, implica una crisis de legitimidad del sistema democrático que proviene de su propio seno.

4. Una prolífica discusión de la tesis de Laclau se encuentra en «Populism and Popular Ideologies», *LARU Studies* 3, no. 2/3 (January 1980).

contradicción específica "pueblo-bloque en el poder" y distinta, por lo tanto, de las contradicciones de clase; y segundo, reconociendo el principio de determinación de clase como principio formal de articulación del discurso ideológico, lo que le permite distinguir un "populismo de clases dominantes" (que desarrollan en forma limitada la contradicción "pueblo-bloque en el poder") y un "populismo de clases dominadas" (que exacerban ese antagonismo hasta el límite virtual de la extinción del Estado).

La eficacia del nacional-populismo –y concretamente del peronismo– consistió en su capacidad de elaborar estas interpelaciones popular-democráticas en el marco de una crisis histórica específica: la crisis oligárquica. "El populismo consistirá, precisamente, en reunir el conjunto de las interpelaciones que expresaban la oposición al bloque de poder oligárquico –democracia, industrialismo, nacionalismo, antiimperialismo–, condensarlas en un nuevo sujeto histórico y desarrollar su potencial antagonismo, enfrentándolo con el punto mismo en que el discurso oligárquico encontraba su principio de articulación: el liberalismo" (Laclau 1977: 221). El peronismo, por lo tanto, no se identifica con un estrecho proyecto de clase: el desarrollo del capitalismo nacional. Su éxito y fortaleza provienen, por el contrario, de la "radicalización de las interpelaciones populares antiliberales", lo que le permitió constituir un sujeto que rebalsaba los marcos de una burguesía desarrollista en ascenso. Inversamente, los límites del populismo peronista estarán dados por la naturaleza de su proyecto de clase: la lucha popular contra el Estado sólo podía desarrollarse dentro de un esquema compatible con el desarrollo del capitalismo nacional (los límites de la explosividad popular se reconocen en la presencia de una ideología militar, en la marginación del campesinado, o en la domesticación de los sindicatos).

La interpretación de Laclau evita el reduccionismo de clase: la experiencia nacional-populista constituye *belle et bien* un sujeto, "pueblo", a partir del despliegue de interpelaciones popular-democráticas. Los presupuestos en que descansa esta interpretación, sin embargo, merecen dos reparos fundamentales: en primer lugar, el peronismo no consistió en desplegar la contradicción pueblo-Estado, sino al contrario, en realizar su conjunción; en segundo lugar, la relación entre Perón y las masas populares cae, en gran medida, fuera del discurso. La noción de "pueblo" como sujeto que se constituye discursivamente contra el Estado (Laclau) está en las antipodas de la experiencia nacional-popular, definida precisamente por la conjunción no discursiva entre pueblo y Estado.

Las objeciones de Emilio de Ipola (1982) al análisis de Laclau permiten avanzar, en efecto, hacia este segundo tipo de interpretación. De Ipola, influido por el estructuralismo en el análisis del discurso, llama la atención sobre los componentes no discursivos del fenómeno peronista. Su argumento tiene la desventaja de las posiciones intermedias: De Ipola admite que el peronismo se constituye discursivamente, pero luego se revierte en una relación no discursiva. La frase "si Perón lo dice, ha de ser cierto" expresa esta transformación de un liderazgo originariamente discursivo (en el sentido de Laclau) en otro no discursivo, al cual se da crédito sin examen ni crítica. "La figura del líder es *constituida* esencialmente a través y por medio de discursos, esto es, del ciclo complejo de la producción, circulación y recepción de discursos... [sin embargo] por una suerte de efecto de retorno, dicha figura misma, una vez así constituida, se vuelve a su turno *constitutiva* del sentido objetivo de los discursos que atraviesan el campo ideológico-político" (De Ipola 1982: 128-29).

De Ipola queda a medio camino entre Laclau y Germani, quien otorga al fenómeno carismático todo el peso de la prueba. Germani, en efecto, insiste en el carácter no institucional del nacional-populismo y en la particular relación entre liderazgos carismáticos y masas disponibles como principio constitutivo (y no secundario, como cree De Ipola) de la experiencia nacional-popular. El Estado pierde su forma institucional para encarnarse en la figura de un jefe carismático que, no obstante, utiliza todavía y esencialmente la palabra como instrumento de movilización. Pero la oratoria populista no es más que demagogia, que indica no tanto exceso de discurso, como la vacuidad del discurso que se manifiesta en un exceso de palabras. Esta vacuidad del discurso es justamente el carisma. La relación entre liderazgo y masas no pasa entonces a través del discurso, sino del carisma del jefe nacional-popular.

Las consecuencias del principio carismático de fundación del nacional-populismo invierten el razonamiento de Laclau: los contenidos del discurso populista, antioligarquismo y antiimperialismo en particular, son expresiones completamente vacías, no constituyen realmente un sujeto. Las masas nacional-populistas —como ha sido subrayado por doquier— no se definen por su oposición a las estructuras de dominación oligárquicas, sino que antes que nada por su fidelidad política: las masas son, antes que nada, peronistas, getulistas, cardenistas, gaitanistas, apriistas, etc., y sólo secundariamente, y de un modo por completo irrelevante, antioligárquicas o antiimperialistas. La argumentación de Germani es esencialmente correcta en este punto: la conjunción entre Estado y masas se realiza a través de liderazgos carismáticos que, en lo sustancial, caen fuera del plano del discurso. Germani, sin embargo, comparte el mismo prejuicio ilustrado que está presente en Laclau: un sujeto sólo puede constituirse discursivamente. Germani, en efecto, termina por reducir la experiencia nacional-populista a un mero efecto de manipulación carismática. Las masas entran y permanecen en dicha experiencia como "masas en disponibilidad", como masas vacías o anómicas, carentes de toda sustancia cultural. Todo el peso de la prueba recae sobre la audacia verbal de determinados liderazgos demagógicos y sobre una oscura "psicología de masas" proclive al contagio emocional. La noción de "pueblo" carece, por lo tanto, de toda consistencia; es un artificio de la retórica política. Germani sólo reconoce la presencia de sujetos constituidos discursivamente: "clases" y, sobre todo, "ciudadanos", con lo cual descarta la experiencia nacional-popular como experiencia constituyente de un sujeto. El mismo razonamiento, pero invertido, aparece en Laclau: la noción de "pueblo" sólo tiene sentido como sujeto discursivamente orientado contra el Estado. Laclau traslada esta noción, elaborada más tardíamente por una izquierda iluminista, al corazón del nacional-populismo, que permanece, no obstante, completamente ajeno a una definición de esta naturaleza.

La sociología del nacional-populismo, en definitiva, ha tropezado con el límite de sus propias categorías: reconocer la existencia de un sujeto no discursivo ha resultado una tarea imposible para ella. La condición de posibilidad del nacional-populismo, sin embargo, radica precisamente en la existencia de un sujeto de este tipo, vale decir, en la presencia de un sujeto "pueblo" cuya especificidad consiste en constituirse fuera del horizonte de la cultura ilustrada. La paradoja del nacional-populismo, esa inasible combinación entre la vacuidad de su discurso ("carisma", que condujo a afirmar el carácter ilusorio del sujeto involucrado) y fortaleza histórica (que defraudó el optimismo histórico de los sesenta, frente al cual no hubo más remedio que



restaurar el carácter discursivo del sujeto, verbigracia, Laclau), puede resolverse admitiendo simplemente que el nacional-populismo convoca y constituye, en el plano de la acción política, un sujeto extraño y refractario a toda pretensión iluminista que, no obstante, permanece como sujeto, vale decir, como principio autónomo de organización del mundo.

## LA EXPERIENCIA NACIONAL - POPULAR

La constitución del sujeto en la experiencia nacional-popular puede ser definida convenientemente a través del concepto de "participación". Este concepto adquiere un carácter inmediatamente visible en los modelos de fusión liderazgo-masas que caracterizan a toda auténtica experiencia nacional-populista (y que, por contrapartida, faltan por completo en toda tentativa por constituir la noción de "pueblo" de un modo iluminista). La construcción del sujeto por participación significa concretamente esto: que el sujeto se constituye a través de un *principio de trascendencia no discursivo*. Dos son las características principales de este modo de constitución: por una parte, todo sujeto se construye en relación a Otro, vale decir, en relación con algo que lo trasciende: sin embargo, la identidad de un sujeto puede ser establecida contra Otro (identidad por diferenciación), o bien a través de Otro (identidad por participación). En el primer caso, el Otro entra como un medio a través del cual se constituye el sujeto, como pura negatividad (en el sentido de Laclau, el pueblo se construye como conciencia de sí en la lucha contra el Estado); en el segundo, el Otro entra como fin (o valor), como aquello sin lo cual el sujeto no logra constituirse en ningún sentido. Este es específicamente el caso de la noción de pueblo que consideramos aquí: el pueblo no se constituye nunca desde sí mismo, sino a través de un principio de trascendencia que encarna el valor, frente al cual sólo es posible definirse en términos de participación. El pueblo, por lo tanto, no se constituye como sujeto político contra el Estado, sino a través de liderazgos políticos que permiten la conjunción masas-Estado. El pueblo se convierte en sujeto político a través de Perón.

Pero esto no define enteramente el carácter de los modelos de fusión nacional-populares: el principio de trascendencia funciona, en este caso, específicamente bajo una modalidad no discursiva. El modo de la participación, del reconocimiento del otro como finalidad, puede realizarse, en efecto, discursivamente: es el caso de la ética fraternal del amor al prójimo o de la ideología democrática como formación discursiva de una voluntad general. La ética fraternal o la ideología democrática realizan de un modo racional el concepto de la participación, básicamente a través de la comunicación verbal, de la explicitación discursiva del otro como valor. La ética y la política son, en este sentido, esferas saturadas de discurso. Todavía más, son esferas definidas por la presencia de intermediarios discursivos: en un caso, los profetas; en otro, los ideólogos. El funcionamiento del liderazgo profético o político contrasta en forma aguda con el del liderazgo populista. La misión del profeta (como la del ideólogo político) se circunscribe y agota en el plano de la palabra. El liderazgo nacional-popular, por contrapartida, se realiza fundamentalmente fuera del discurso, lo que trae consigo esta importante consecuencia: el "culto a la personalidad". A diferencia del profeta o del ideólogo, el líder no aparece simplemente como vehículo, sino como manifestación de un principio de trascendencia. La identificación personal con un determinado liderazgo, el "culto a la personalidad" característico de todo nacional-

populismo, es la prueba específica de su carácter no discursivo. Tanto el profeta como el ideólogo rechazan sistemáticamente todo "culto a la personalidad" (o, en términos religiosos, toda sacralización): no son más que intermediarios de una Idea, nunca la manifestación o representación sensible de ésta. El líder nacional-populista suscita, en cambio, "culto", identificación ritual, precisamente porque su naturaleza peculiar consiste en realizarse fuera del discurso.

El concepto de participación, sin embargo, no es solamente "culto a la personalidad". Los modelos de fusión entre liderazgo y masas poseen otro rasgo específico: su carácter festivo. Los escenarios de fusión nacional-populistas son usualmente escenarios festivos. "El tiempo del peronismo fue alborozado y callejero con talante de romería y sabor a fiesta", recuerda A. Cafiero (1983), contrastándolo con el mesianismo de la juventud radical de los años setenta, que transformó las calles en escenarios de lucha, antagonismo y diferenciación. Más importante en este punto es la distinción germaniana entre "movilización primaria" y "secundaria": nacional-populismo y fascismo descansan por igual en modelos de fusión; sin embargo, uno se realiza en el modo de la participación, otro en el modo de la diferenciación. El modelo de fusión, en el caso del fascismo, se constituye esencialmente en torno a una víctima sacrificial (las minorías, el "tercero excluido" que Girard generaliza como estructura de todo mecanismo de cohesión ritual); en el caso nacional-popular, en cambio, sorprende la ausencia de víctimas sacrificiales, que usualmente sólo existen, de un modo irrelevante, en el plano del discurso; Braden o el "Club de la Unión" son puramente conceptos, que nunca adquieren el estatuto de una representación sensible de la víctima sacrificial; por lo tanto, no son capaces de constituirse en detonantes de la cohesión social. Esto da una coloración totalmente diferente a ambos fenómenos. El fascismo es básicamente un mecanismo de movilización disciplinaria de las masas, cuyo destino natural es la guerra. El nacional-populismo, en cambio, es un mecanismo de movilización participativo, cuyo modo de expresión más profundo no es nunca la guerra, sino la fiesta. ¿Quién podría pasar por alto la diferencia entre un mitin fascista, disciplinario y guerrero, y uno nacional-popular, esencialmente festivo? La proximidad entre nacional-populismo y fascismo es sólo aparente, pese a que ambos descansan en un sujeto constituido de un modo no discursivo.

La experiencia nacional-popular reposa, por lo tanto, esencialmente en modelos de fusión que pueden ser definidos en términos de participación (conjunción entre masas y Estado) y ausencia de discursividad (explicitación del valor en el plano del ritual y no de la palabra). Este mecanismo de participación no discursivo es equivalente al de toda fiesta: por un lado, la fiesta suspende, en un tiempo-espacio trascendental, la diferenciación social y elimina particularmente la violencia, vale decir, realiza la conjunción de lo heterogéneo, v.gr. el divorcio entre pueblo y nación o entre masas y Estado. Por otro lado, la fiesta implica siempre la suspensión de la función discursiva; la participación festiva es propiamente comunión que se valida en el plano de la sensibilidad y no del entendimiento, de la mimesis más que de la palabra. Este modelo festivo se distingue particularmente de toda modalidad discursiva de producción del sujeto, ya sea "clase" o "ciudadano". La noción de clase se obtiene por conciencia de la diferenciación existente en el plano de la estructura económica y se elabora como ideología del antagonismo social. La noción de ciudadanía, a su turno, suprime el proceso de diferenciación pero lo hace a través del concepto de igualdad jurídica y política, vale decir, del reconocimiento discursivo de derechos comunes a



todos. Nada de esto aparece en la experiencia nacional-popular, que permanece en la frontera de toda ideología, lejos de toda interpelación de clase o democrática.

La eficacia de este modelo transcurre probablemente más allá de las intenciones del líder nacional-popular, que se asume muchas veces como un liderazgo discursivo ya sea en un sentido profético (el componente específicamente moral suele aparecer en el discurso nacional-popular), ya sea en un sentido político (la ideología antioligárquica y antiimperialista también juega un rol, a veces predominante, como en Víctor Raúl Haya de la Torre, quien se permitió escribir algo al respecto). Ocurre, sin embargo, que el motor de la experiencia nacional-popular no está solamente en el líder, sino sobre todo en las masas populares. Son ellas las que otorgan –a veces contra las pretensiones explícitas de la jefatura– el carácter específico de esta experiencia.

Dos operaciones características de la conciencia popular muestran esto. En primer lugar, es habitualmente el pueblo quien atribuye dotes extraordinarias al jefe nacional-popular, quien magnifica sus virtudes y engrandece sus cualidades. No es extraño incluso que se le otorgue poderes taumátúrgicos, al modo de la realeza sagrada, y se edifique un verdadero culto religioso frente a sus despojos (no en vano la última y desesperada tentativa por “desperonizar a las masas” ha consistido en violar sistemáticamente la tumba de Perón). La constitución del jefe en principio de trascendencia dotado de valor es ciertamente una construcción popular que suele ir más allá de todas las expectativas originales de la jefatura política y de sus secuaces. El carisma no es solamente una cualidad intrínseca del líder ni se valida únicamente a través de la propaganda, como creen los teóricos de la sociedad de masas: es simplemente la consecuencia de un modo específicamente popular de constituirse como sujeto. En segundo lugar, el carácter no discursivo de la presencia del liderazgo nacional-popular está asimismo constituida desde abajo. La vacuidad del discurso nacional-populista no es sólo un rasgo del emisor (“demagogo”), sino sobre todo del receptor (las masas populares). El discurso cae literalmente en un saco roto: las exigencias de participación se agotan en el contacto, en la comunión festiva que se consigue por mediación del líder. *Nada es menos importante que lo dicho, nada más importante que lo vivido*: ésta es la máxima popular por excelencia.

La teoría germaniana de la manipulación carismática es, pues, completamente insuficiente en este aspecto. El “carisma” (como identificación con valores que trascienden la esfera cotidiana del sujeto) y la “demagogia” (como construcción de una relación no discursiva con ese principio de trascendencia) son obras esencialmente populares. Las masas no son, por lo tanto, “masas en disponibilidad”, anómicas, susceptibles de manipulación, juguetes en manos de líderes inescrupulosos. Todo lo contrario: son éstas quienes afirman en el liderazgo nacional-popular su modo específico de existencia como sujetos. El propio jefe político presiente todo esto oscuramente: la energía popular desatada a través suyo suele ser una consecuencia imprevista, apenas imaginada en los comienzos. La exigencia de fusión, sin embargo, termina por imponerse también para él: el jefe no permanece nunca fuera de dicha experiencia, como un estratega frío y racional que establece una relación puramente instrumental con las masas, como supone Germani. La importancia de tres grandes suicidios históricos, Chibás en Cuba, Getulio en Brasil y Allende en Chile, lo atestiguan.

El nacional-populismo no es sólo un modelo de fusión que se verifica ritualmente; es también un modelo institucional. La relación germaniana entre carisma y masas – característica del modelo de fusión– se transforma en una relación particular entre Estado (o partido) y actores sociales. ¿Cómo se realiza esta transferencia del carisma hacia el Estado y la transformación de las masas en fusión en actores sociales? La singularidad de los regímenes nacional-populares, según Alain Touraine (1989), es la ausencia de diferenciación entre Estado, sistema político y actores sociales. "Un régimen nacional-popular sólo puede existir si Estado, sistema político y actores sociales no están separados unos de otros, si no son actores que tendrían que negociar sus relaciones" (Touraine 1989: 167). Esto significa que los actores sociales están constituidos a través del Estado (heteronomía) e, inversamente, que el Estado se define por una política de movilización e incorporación social (participación). Esta reciprocidad entre Estado y actores sociales se aparta específicamente del modelo democrático representativo, que presupone la diferenciación entre Estado y sociedad y la constitución de un sistema político autónomo capaz de negociar esa relación. Pero tampoco los regímenes nacional-populares son regímenes simplemente autoritarios: la eliminación del sistema político no conlleva el dominio del Estado sobre la sociedad. Tales regímenes se definen, por el contrario, por la conjunción entre ambos.

El mecanismo de participación, característico del nacional-populismo, se confunde a menudo con uno de integración. Integración presupone un Estado preconstituido frente a la sociedad, que ofrece medios de vida, oportunidades a través de las cuales los sujetos pueden aumentar sus probabilidades de incorporación social (v.gr. políticas sociales o desarrollo económico). La singularidad de los regímenes nacional-populares es otra: en este caso, *el Estado se ofrece a sí mismo como mecanismo de participación*, del mismo modo como el líder populista ofrece su persona (y a veces su cuerpo) como mecanismo de constitución simbólica del sujeto.

Este mecanismo de participación impide obviamente la formación de actores sociales autónomos. La participación obrera no sigue la pauta de la acción de clase en sentido europeo, es decir, no se constituye a partir de la conciencia común de intereses de clase y la búsqueda de autorrepresentación política. Tampoco se dirige a la formación de ciudadanos que afirmen sus derechos como derechos anteriores al Estado, que puedan, por lo tanto, ser validados fuera de éste. Los actores sociales se forman siempre a través del Estado. La conciencia de clase y la conciencia democrática están subordinadas a la presencia del Estado que, por este mismo hecho, las deforma, puesto que las priva de su atributo esencial: precisamente su cualidad de conciencia anterior e independiente del Estado. Pero esta heteronomía de los actores sociales, sobre la cual Alain Touraine ha insistido justamente, se revierte sobre el Estado mismo, que no puede dejar de definirse como mecanismo de participación orientado hacia la protección de las masas populares y, más aún, como escenario de conjunción con éstas. El Estado no puede, en efecto, constituirse como una voluntad independiente de la sociedad y definir sus objetivos al margen de sus necesidades. Heteronomía y participación definen, de este modo, un modelo de reciprocidad: los actores sociales ceden su soberanía frente al Estado, pero éste, en contrapartida, está obligado a definirse en términos sociales, perdiendo con ello su naturaleza específicamente estatal.

Los regímenes nacional-populares fortalecieron indudablemente el Estado, pero nunca fundaron una burocracia racional, vale decir, una política racional de administración de masas. Les faltó aquello que define la administración estatal moderna: la exterioridad del Estado frente a la sociedad. El Estado, por el contrario, fue un escenario permanentemente penetrado por los intereses sociales. La formación del sindicalismo obrero es el ejemplo más conocido en este sentido: el sindicalismo se constituye e instala literalmente en las oficinas del Ministerio del Trabajo. Los actores sociales se constituyen burocráticamente e, inversamente, la burocracia se define en términos sociales, vale decir, en términos de apropiación social de los recursos de poder. El Estado no se define por una "política de masas" (como sostienen aquellos que nunca dejan de ver en los regímenes nacional-populares una voluntad propiamente estatal separada de la sociedad): por el contrario, las masas logran acceso al Estado, siempre desde luego a través de una mediación burocrática, "pelegos", "charros", etc., que se apropian de parcelas enteras de la administración pública e intervienen activamente sobre la distribución de los recursos fiscales.<sup>5</sup>

Tampoco los regímenes nacional-populares pueden ser estrictamente definidos a partir de una "política de desarrollo". "Las políticas nacional-populares —señala Alain Touraine— son desarrollistas, pero no están al servicio de una burguesía nacional. La construcción del Estado no a lo Bismarck, sino capaz de superar las contradicciones y los riesgos de estallido de la sociedad, es el objetivo principal de la política nacional-popular" (Touraine 1989: 200). Toda definición del nacional-populismo en términos de un proyecto de desarrollo —específicamente de un proyecto de industrialización nacional— peca de exageración. El mecanismo de participación nacional-populista no está subordinado a la economía: es anterior, y en muchos casos independiente de una política de desarrollo. La ineficiencia económica del nacional-populismo, que comprende no solamente las usuales crisis inflacionarias por exceso de gasto público, sino también la incapacidad de superar el período fácil de sustitución de importaciones y de iniciar una política de "gran empuje" en materia de industrialización, es únicamente el resultado de anteponer el imperativo de la participación a la exigencia de crecimiento.

La recomendación de Perón al general Ibáñez resume esto: "Dé al pueblo, especialmente a los trabajadores, todo lo que pueda. Cuando a ud. le parezca que les da mucho, déles más. Verá el efecto. Todos tratarán de asustarle con el fantasma de la economía. Es todo mentira. Nada hay más elástico que esa economía que todos temen tanto, porque no la conocen" (Magnet 1956: 14).<sup>6</sup> El fortalecimiento económico del Estado en los regímenes nacional-populistas —y especialmente la política de nacionalizaciones— se explica menos por el afán de favorecer un proceso autónomo de industrialización, y mucho más como un medio para robustecer la capacidad

5. Esta capacidad del Estado de incorporar masas en su seno estuvo doblemente limitada: primero, por el carácter urbano de la base nacional-populista que dejaba fuera las masas campesinas (salvo en México y en Bolivia) y, cada vez más, las masas marginales urbanas que se constituían fuera de la influencia estatal; segundo, por el carácter necesariamente indirecto de la participación popular, mediatizada por burocracias que tendían a la apropiación privada de los recursos estatales. Estos límites ralentaron por doquier la esperanza de una fractura entre Estado y sociedad: lucha de los «marginales» contra el Estado y de los obreros (especialmente de la clase obrera no tradicional) contra sus dirigentes.

6. Esta orientación antieconómica, en el sentido de una adaptación metódica y sistemática a las exigencias ordinarias de la vida económica, es típica de todo liderazgo carismático. Las consecuencias antieconómicas de la fundación carismática del Estado se repiten por doquier en todas las experiencias nacional-populistas.



redistributiva del Estado. El discurso antioligárquico y antiimperialista tiene otra vez pies de barro: no es la lógica desarrollista la que preside; es la lógica de la apropiación estatal de excedentes con el fin de financiar una política de participación. La virulencia de las nacionalizaciones del capital extranjero contrasta con la indolencia nacional-populista frente al tema agrario: ¿qué excedentes podían obtenerse de la expropiación de una clase terrateniente, la mayor parte de las veces económicamente estéril? La lógica económica de estos regímenes consiste, por lo tanto, en ampliar la capacidad distributiva del Estado a través de una política simple de nacionalizaciones, y ofrecer el Estado como instrumento de participación, ya sea de un modo regulado (principalmente con la fijación de la política salarial y de precios o con el crecimiento de la burocracia pública) o no regulado (con la corrupción, mal endémico de tales regímenes).

La vigencia de la pauta nacional-populista como modo de orientación política del mundo popular, se prolonga más allá de los regímenes que la encarnaron históricamente. Un error de perspectiva llevó a la sociología a ignorar este hecho: la probabilidad de transformar la pauta de constitución del sujeto, ya sea en un sentido democrático o revolucionario, se dio por descontada una vez que los grandes líderes nacional-populistas desaparecían de la escena (todos ellos, sin excepción, víctimas de "golpes militares", detalle no carente de significación para nuestros propósitos). La hipótesis más corriente ha sido aquella que pronostica la radicalización de la movilización popular en un marco de descomposición de los regímenes nacional-populistas, que caen puntualmente por obra de una crisis estructural (agotamiento del "modelo de industrialización hacia adentro") y política (surgimiento de regímenes autoritarios destinadas a frenar por medios represivos dicha movilización). Pauperización y represión ofrecen un cuadro inmejorable para retomar el hilo de una movilización popular autónoma, constituida fuera del sistema político y dirigida contra el Estado.

La hipótesis radical invierte la noción de "pueblo" característica del nacional-populismo: "pueblo" es todo *sujeto discursivamente orientado contra el Estado*. La probabilidad de existencia de un sujeto de este tipo no ha sido nunca demasiado alta. El radicalismo político latinoamericano ha seguido sustancialmente dos modelos que confirman su impotencia histórica. Por una parte, el modelo "foquista" de los años sesenta, que promueve explícitamente la sustitución de las masas populares por una vanguardia iluminista. R. Debray, en su conocido folleto "Revolución en la Revolución" (1961), describe la esencia del modelo foquista en estos términos: "El campesino y el obrero de que hablamos no tienen derecho a la palabra; en primer lugar, porque no se les ha dado ese derecho, y luego porque no tienen posiblemente nada que decir, porque no tienen ninguna necesidad de liberarse, al no saberse explotados y humillados. Es una perogrullada reconocer que la conciencia de ser pueblo y de ser un pueblo es dada a éste por el intelectual" (p. 156). El foquismo es un reconocimiento explícito de la ausencia de discursividad de las masas populares y deposita, por consiguiente, la tarea revolucionaria fuera de éstas. Pero el foquismo no expresa tanto la dificultad de movilizar discursivamente a las masas, sino la renuncia a hacerlo: Guevara, en efecto, no se instala cerca de las zonas populares, sino en la selva, entre indígenas que escasamente hablaban la misma lengua; al mismo tiempo, sus proclamas "al pueblo boliviano" quedaron olvidadas entre el equipo de los guerrilleros, mientras los esfuerzos por instalar una radio ocupaban un lugar secundario en la

operación. El foquismo, en este sentido, es la respuesta a una larga serie de fracasos de la izquierda latinoamericana por movilizar discursivamente al mundo popular contra el Estado: impotencia de los partidos comunistas, por una parte, usualmente condenados por el fervor nacional-populista de las masas, pero también de la "pequeña izquierda" radical, a la que el exceso discursivo vuelve por completo estéril e insignificante.

El fracaso del foquismo produjo su contrario: el populismo, en el sentido ruso del término; vale decir, la afirmación de un sujeto popular preconstituido frente al Estado, que no necesita la mediación de los "intelectuales" para realizarse como tal. Meros "portavoces" o "acompañantes", la función de los intelectuales consiste más en identificarse que en representar al mundo popular (lo que origina los célebres movimientos de "ida al pueblo") y hacer de caja de resonancia nacional, y en ocasiones formular sistemáticamente el ethos popular preexistente. El reconocimiento de este ethos popular, que para el caso ruso se encarnaba en las tradiciones comunales de la *obshina* campesina, resultó, sin embargo, casi siempre, problemático. El esfuerzo más notable por definirlo lo han hecho investigadores peruanos,<sup>7</sup> especialmente bajo la inspiración de Alberto Flores Galindo (1988); estos autores encuentran el núcleo del ethos popular en las tradiciones del milenarismo andino, cuya línea de fuerza pasa por Juan Santos Atahualpa, la revolución tupamarista, las profecías de Gabriel Aguilar y las montoneras independentistas, para rematar en las invasiones de tierras, particularmente las organizadas por Hugo Blanco y, con algunos reparos evidentes, en Sendero Luminoso. Esta tradición milenarista, aunque episódica e irregular, sobrevive – y esto es lo realmente importante – en los migrantes serranos que invaden Lima, quienes son representados como "conquistadores de un Nuevo Mundo" (Degregori et al. 1986) o nuevos "caballos de Troya" (Golte & Adams 1987), vale decir, como portadores de un ethos popular definido por la solidaridad entre los pobres de una "ética de la fraternidad" y la vigencia de una utopía andina (la lucha contra la dominación hispano-colonial y republicana en nombre del "mito de Inkarrí", del retorno del Inca y del reino de la libertad y de la abundancia).

La ideología populista, sin embargo, no ha dejado más huella que un conjunto de experiencias ejemplares del tipo Villa El Salvador (Perú) o Villa Francia (Chile): estos núcleos de resistencia popular que permanecen fuera de la cultura de masas, que dejan de orientarse a través del sistema político y que contestan la autoridad estatal, no han conseguido nunca expandirse demasiado. El límite de este tipo de ideología no se encuentra tanto – como se sostiene habitualmente – en la fortaleza de los aparatos de dominación, sino en la naturaleza del sujeto popular. La variante iluminista del populismo, que supone un sujeto preconstituido en forma discursiva (variante específicamente chilena que dota al "pueblo" de un discurso sobre todo moral), no tuvo nunca demasiada audiencia: la indiferencia popular frente a los derechos humanos como núcleo de una contestación política o religiosa ha sido plenamente confirmada. Sobre esto volveremos más adelante. No parece tener ninguna fortuna la variante milenarista que reemplaza el discurso por el mito, en la línea propuesta por Mariátegui y a su vez tomada de Sorel, el cual promueve explícitamente una

7. Entre los sociólogos peruanos que han trabajado en esta perspectiva, puede mencionarse a Degregori, Blondet & Lynch (1986); Golte & Adams (1987); Stein & Monge (1988); y en una línea más matizada, el importante ensayo de Matos Mar, *Desborde popular y crisis del Estado* (1988).

reinterpretación del socialismo como expresión del "mito de Inkarni" y de la violencia revolucionaria como violencia milenarista (lo que de todos modos indica que Mariátegui comprendió mejor que otros el carácter no discursivo del sujeto popular). El milenarismo, que implica constitución del sujeto por diferenciación, contrasta con las poderosas tendencias hacia la participación que perviven en las masas populares: sobre todo, su incorporación dentro de la cultura de masas (bajo fórmulas sincréticas presentes en la música "chicha", por ejemplo, verdadero dolor de cabeza de la intelectualidad que se identifica con la pureza de la expresión andina) y la persistente orientación popular hacia liderazgos políticos de carácter plebiscitarios, si no derechamente nacional-populistas (Alan García, Belmont o Fujimori), que desmienten dramáticamente las ilusiones previas de radicalización popular (parcialmente presentes en las votaciones de H. Blanco y A. Barrantes en años anteriores).

La ausencia de radicalismo político no debe interpretarse como conformismo, apatía o retraimiento, como suelen hacerlo las teorías sociológicas sobre la pobreza. Las masas populares son perfectamente susceptibles de movilizarse contra el Estado, en cuanto estructura de dominación, pero lo hacen de un modo que permanece dentro de la pauta nacional-populista que vimos anteriormente. Dos formas típicas de movilización popular ilustran esto. La primera cae bajo la denominación de "motines de subsistencia", acuñada por el historiador inglés E. P. Thompson, como estructura característica de la "violencia de los pobres". Los "motines de subsistencia" provienen de crisis agudas de pauperización, generalmente crisis inflacionarias que deprimen súbitamente el nivel de subsistencia popular, ubicándolo bajo el umbral de lo humanamente tolerable. El modelo histórico de estas revueltas son los "motines antifiscales" del campesinado del Antiguo Régimen, o los "motines propiamente de subsistencias" de las masas urbanas, cuyo detonante solía ser la carestía del pan (por ejemplo, en los albores de la Revolución Francesa). Este modelo de violencia popular no implica nunca un cuestionamiento de las bases tradicionales de legitimación del poder. Las masas campesinas del Antiguo Régimen continuaban siendo perfectamente legitimistas, así como las masas urbanas siguen estando referidas al Estado como mecanismo de protección social (la captura de Luis XVI se hizo para que éste cumpliera su función de "panadero", y en ningún caso para destronarlo). Los motines de subsistencia no están conectados, por consiguiente, con ninguna voluntad democrática o radical: no es la superación del Estado lo que está en juego, sino todo lo contrario, la demanda por Estado como instrumento de defensa de una comunidad amenazada por la crisis.

Este modelo de "violencia de los marginales" es claramente reconocible en nuestro caso: primero, en las llamadas "invasiones de terreno" que acompañan generalmente la entrada de los migrantes en las ciudades. Inútilmente la sociología ha tratado de ver en estas movilizaciones la constitución de un sujeto autónomo, definido en términos de "clase" o "ciudadanía": la lucha contra la policía y la violación del derecho de propiedad parecen indicadores suficientes de una contestación radical contra el Estado. Sin embargo, nada de eso tiene el sentido que se le atribuye: los invasores promueven con igual denuedo la legalización de sus títulos de dominio, y la organización vecinal se disuelve en la formación de clientelas o en la adhesión a liderazgos nacional-populistas (como ocurrió sobre todo con Odría en Perú y Frei en Chile). La masa de "pobladores sin casa" permanece enteramente dentro del modelo nacional-popular. Igual cosa ocurre aparentemente con nuestros "motines de sub-



sistencia", cuyo arquetipo son los "quebra-quebra" paulistas y las explosiones de violencia difusa que recorren periódicamente las capitales latinoamericanas. La asociación entre violencia e historicidad es aquí todavía más remota –pese a que no pocos autores han tratado de establecerla–, dado el escaso encuadre político de estas manifestaciones. La "violencia de los marginales" existe efectivamente; sin embargo, no conlleva nunca la constitución de un sujeto discursivo; no implica el despliegue de una conciencia de clase o ciudadana o, dicho de otra manera, no modifica la pauta de constitución del sujeto dada previamente.

Existe, sin embargo, otro modelo de radicalización popular que podemos denominar (utilizando una expresión de A. Touraine, aunque en un sentido algo diferente) "hiperparticipación". En este caso, la movilización popular se despliega fuera de los marcos de la intervención estatal que caracteriza a los regímenes nacional-populistas, pero no abandona su modalidad específica: la orientación hacia la participación con carácter festivo.

El ejemplo más notable es el de la Unidad Popular (UP) chilena. Dos características centrales de la movilización de masas en este caso deben ser tomadas en cuenta. En primer lugar, ésta se consigue a través de un aumento súbito y espectacular del consumo de masas, que virtualmente se desconecta de toda disciplina financiera y esfuerzo productivo. El programa contemplaba una política de reajustes de sueldos y salarios (que excedió lo imaginado, según S. Ramos [1972], uno de los mejores comentaristas de la política económica de la UP: alza estimada entre 25 y 30 por ciento en términos reales), el aumento de los "fondos de consumo social", que comprende básicamente el gasto fiscal de carácter social (que se elevó de 100 a 157 en el período considerado), y un programa de absorción de cesantía, que culminó en una situación de pleno empleo (la tasa de desocupación bajó hasta niveles de desempleo friccional, vale decir, menos de 5 por ciento). Todo esto se realizó en el marco de una política de control de precios y expansión del gasto público (que echó mano en gran medida de las reservas internacionales disponibles y, a la postre, de la emisión de dinero), destinada a sostener la política de participación, esto es, a evitar la inflación y el desabastecimiento. Esta repentina elevación del nivel adquisitivo de las masas se tradujo, por ejemplo, en el aumento del consumo de alimentos: "el consumo de carne de vacuno ha aumentado en un 15 por ciento, el de porcino en 18 por ciento, el de ovino en 5 por ciento, el de aves en 16 por ciento, el de papas en 55 por ciento, el de arvejas en 21 por ciento, el de limones en 56 por ciento, el de leche condensada en 10 por ciento, el de azúcar en 37 por ciento, el de fideos en 28 por ciento y el de cerveza en 20 por ciento". Paralelamente, aumentó el consumo de bienes durables en una escala todavía mayor, por efecto de una política de redistribución que favoreció también a las clases medias. El carácter netamente populista del programa de la UP admite pocas dudas: el financiamiento de esta política de participación debía provenir del aprovechamiento de las "potencialidades productivas existentes" (stocks acumulados, capacidad industrial ociosa, subutilización de la mano de obra) y de la transferencia de excedentes privados (de las llamadas "empresas monopólicas" en curso de estatización) hacia el sector público. Lo que prevaleció a la postre, sin embargo, fue una transformación generalizada de excedentes productivos en consumo de masas, que quebró rápidamente las posibilidades de acumulación tanto en el plano de las empresas (obligadas a disminuir sus "tasas de ganancia" por efecto de la política salarial y de precios), como en el plano del Estado, donde el grueso del gasto público

(absorción de cesantía, programas sociales en salud y educación, financiamiento de la política salarial, etc.) se orientó escasamente a ampliar la capacidad productiva. Los resultados de esta política estaban en gran medida predeterminados: "El éxito –señala el economista Sergio Ramos (1972)– en resolver cuestiones tales como la inflación, los bajos salarios, la cesantía, el problema de la vivienda popular, etc., más que problemas de un funcionamiento económico satisfactorio, era una de las condiciones ineludibles para ampliar la base popular del Gobierno y la UP" (p. 169). El imperativo de la participación popular se antepuso siempre al requisito de la acumulación, como ocurre en todos los esquemas populistas.

Esta política de movilización económica –centrada en la ampliación del consumo popular y no en el trabajo, como ocurre en los esquemas socialistas, v.gr. el modelo "stajanovista" o de la "zafra cubana"– se complementaba con la ampliación de la participación política, canalizada en lo sustancial a través del "allendismo" y del crecimiento inusual del Partido Socialista. El formato nacional-populista de esta movilización se manifiesta sobre todo en el desborde de la función parlamentaria, vale decir, en la presencia de una movilización popular que cae fuera del sistema político y de toda política de representación social al interior del sistema institucional. Dicho de otra manera, la movilización se orienta y se constituye a través del Estado. Sin embargo, de la misma manera como el Estado no fue un agente de organización de la producción, tampoco fue un agente de organización e institucionalización política. La movilización popular desbordó ampliamente la función representativa del sistema político, pero al mismo tiempo cayó en manos de un aparato estatal atravesado por la lucha fraccional de los partidos. Faltó lo que es característico de los regímenes nacional-populistas: la centralización del poder estatal en manos del presidente, la burocratización de los intereses sociales dentro de la administración pública y la conformación de un partido único dominado por la voluntad del líder populista.

El carácter populista de la UP chilena, no obstante, proviene menos de la naturaleza del régimen que de la propia movilización popular. No olvidemos que el régimen se definía en términos socialistas, que estaba dirigido por partidos políticos preconstituidos frente al líder, que pretendía descansar más en organizaciones de clase que en movilizaciones de masas y que asignaba más importancia a la transformación revolucionaria de la sociedad que al aumento de la participación popular. La lógica populista no se alojaba tanto en los partidos, como en Allende (cuya fórmula del "socialismo con vino tinto y empanadas" significaba más o menos esto: participación + consumo), y esencialmente en las clases populares. La movilización popular se ajustó, en efecto, al modelo de la "hiperparticipación" que ofrecía el "allendismo". Por una parte, la movilización económica se orientaba hacia la ampliación del consumo privado y la inserción dentro de la esfera de redistribución estatal del ingreso. Las tomas de terreno, las tomas de empresas (que desbordaron la lista de empresas privadas susceptibles de estatización) y las invasiones de tierras, tuvieron este sentido preciso: colocarse al abrigo de la política populista del Estado. La eficacia de esta movilización no descansó nunca en la expectativa de control obrero-popular de la economía, sino en la expectativa de obtener los beneficios de la política redistributiva del Estado. Los obreros se movilaron muy raramente bajo las consignas de la "batalla de la producción" o del "poder popular": la movilización popular, a pesar de las apariencias y de las ideologías reinantes, estuvo escasamente dirigida contra una determinada estructura de propiedad y poder; más bien, se desplegó y adquirió

fortaleza al amparo de una política de participación estatal, cuyo énfasis desde el comienzo fue la ampliación del consumo de masas. La UP no descansó en una exacerbación de la "lucha de clases", sino en la exacerbación de una política nacional-popular.

La movilización política siguió una modalidad similar: el aumento de la participación política se dio bajo el formato clásico de la relación líder-masas y se expresó en las gigantescas manifestaciones callejeras que hicieron célebre la experiencia chilena. Es cierto que existían sindicatos y partidos preconstituidos frente al "allendismo" y que ambos giraron fuera de la órbita del carisma presidencial. Pero la UP se caracterizó por rebalsar precisamente la influencia de la izquierda tradicional y movilizar masas no incorporadas a las estructuras habituales de representación de clase. El control político de esta movilización, asimismo, no cayó en manos de los partidos, salvo en las clases medias, donde se reclutó el grueso de los militantes y cuadros, y en algunas zonas populares, donde los partidos no pasaron mucho más allá de las experiencias ejemplares (por ejemplo, el campamento Nueva La Habana, o los llamados "cordones industriales", iniciativas de "poder popular" usualmente saturadas de militantes de origen universitario). La movilización popular tampoco tuvo un carácter marcadamente obrero: en la experiencia chilena no aparece el protagonismo obrero que caracteriza las situaciones revolucionarias; las ocupaciones de fábrica, las huelgas, los comités de defensa no dan la tónica general; la presencia sindical (y en gran medida comunista), por último, aparece desbordada por masas que se movilizan más en las calles que en las fábricas. La importancia del "allendismo" es, pues, innegable. Y el "allendismo" no se distingue sustancialmente de la movilización nacional-populista: la movilización, en efecto, adquiere un carácter de comunión festiva antes que de lucha de clases; no es la confrontación política lo que predomina, sino la participación bajo los auspicios de un liderazgo carismático. La ausencia, prácticamente completa, de violencia popular durante el período, que sorprendió siempre a los mejores observadores, es un indicador de esto. Pero también lo es la liquidación final de la experiencia chilena: terminó como todos los regímenes nacional-populista, sin resistencia popular alguna. No existe nada más patético que la diferencia entre la gigantesca manifestación del 4 de septiembre y la escasísima resistencia del día 11: esta evaporación de las masas es la mejor señal del tipo de movilización existente, populista y no revolucionaria.

¿Puede hablarse realmente de un proceso de radicalización de masas durante este período? La importancia de la lógica populista, que hemos señalado, se contrapone con la lógica revolucionaria de los militantes. La movilización popular de entonces tiene poco que ver con la "agudización de la lucha de clases", y probablemente se estuvo tan lejos como siempre de una situación auténticamente revolucionaria. Pero la UP se distingue de los regímenes nacional-populistas en cuanto no impuso límites institucionales a la movilización de masas. La desorganización del sistema político y de los regímenes de empresas, nunca fue compensada por una intervención estatal eficiente y moderadora. Las masas no se orientaron contra una institucionalidad vigente—democracia burguesa y empresa privada—, pero finalmente se alojaron al margen de toda institucionalidad. La movilización popular adquirió, en este sentido, una coloración especial hacia finales del régimen: por un lado, la suspensión del trabajo; por otro, la transgresión. La orientación hacia el consumo, en efecto, fue crecientemente acompañada por el abandono del trabajo que se manifestó



por doquier en el aumento del ausentismo laboral, la movilización política en horas laborales o simplemente la paralización de la producción por exceso de movilización (acompañada a veces de falta de insumos e incentivos materiales). Al mismo tiempo, la participación política no estuvo exenta de un clima de desorden creciente, de puesta entre paréntesis de las reglas que ordinariamente son válidas en la vida cotidiana, e incluso de inversión del orden social. La reacción popular no fue sino marginalmente autoritaria: no existe evidencia de que se exigiera, al menos en forma generalizada, un retorno al trabajo y una restauración del orden quebrantado. Las masas parecían instalarse perfectamente en este espacio de desregulación social, y ello es fácilmente comprensible. La suspensión del trabajo y el desorden son los ingredientes clásicos de la fiesta. No hay verdadera fiesta, en efecto, sin interrupción del trabajo y destrucción colectiva de los excedentes productivos, así como tampoco la fiesta auténtica está privada de exceso y desorden. Y ambos ingredientes se dieron en abundancia durante este período. La radicalización festiva de las masas, no obstante, tiene poco que ver con el radicalismo político de los militantes: la fiesta se constituye por exacerbación del consumo, que no se limita al control popular del excedente según el formato de la lucha de clases, sino que se orienta hacia la transformación generalizada de los excedentes productivos en consumo popular, lo que conduce a una parálisis general de la función productiva. La fiesta también es la exacerbación de la participación popular, fuera de los marcos de regulación institucional habituales; es la suspensión de la estructura de dominación existente; sin embargo, no es lucha por el poder ni búsqueda de una transformación histórica de las relaciones de dominación. La fiesta carece de organización y, sobre todo, está exenta de violencia: es realización del sentimiento de comunidad en un espacio-tiempo trascendental, no histórico. La fiesta, en efecto, está despojada de historicidad: en ella no aparecen ni la exigencia de acumulación ni la voluntad de poder. Toda fiesta, pues, está condenada a terminar, sin dejar huellas significativas en el orden histórico: sólo los militantes confiaban en la irreversibilidad del proceso; para el mundo popular todo era perfectamente reversible, como ocurrió realmente. Ninguna fiesta puede durar indefinidamente: el retorno al trabajo y a la vida privada se realiza sin resistencia alguna; sólo los militantes esperaron inútilmente que ésta se produciría. Toda fiesta, por último, corre el riesgo de terminar mal y enfrenta el peligro de degradarse en penuria económica y violencia generalizada: la restauración del orden no es, en estas condiciones, una experiencia traumática ni una derrota, como lo fue para los militantes revolucionarios, quienes validaban el proceso en términos de una transformación del modo de producción y de las relaciones de poder.

La heterogeneidad entre populismo y radicalismo es equivalente a la que existe entre populismo y democracia. La superación democrática de la pauta nacional-populista (en la cual Germani y su escuela pusieron buena parte de sus empeños) tropieza con dificultades muy similares, a saber, la ausencia de un sujeto discursivamente orientado hacia la política. La democracia, y en términos generales la política, es un espacio de formación discursiva de la voluntad general y presupone la existencia de ciudadanos, vale decir, de sujetos que participan, en forma metódica, deliberada e informada, en el proceso de toma de decisiones. Los regímenes nacional-populistas, en cambio, no constituyen ciudadanía, puesto que reposan sobre un mecanismo de participación enteramente diferente: esto es, un mecanismo de fusión de naturaleza no discursivo.

Esta diferencia puede expresarse en dos modalidades de participación política distintas: en un caso, la participación se realiza a través del sistema político; en otro, a través de liderazgos plebiscitarios. En un esquema democrático predomina, en efecto, la formación de un sistema político a través del "voto representativo"; los regímenes nacional-populares, por el contrario, se constituyen a través de un "voto plebiscitario" que usualmente suprime la función representativa del sistema político. El "voto representativo" supone un sujeto preconstituido que elige representantes: el sistema político aparece como la expresión de una voluntad popular previamente constituida. El carisma, en cambio, no se elige, se corrobora, así como el líder plebiscitario no es nunca realmente electo, sino aclamado. La naturaleza no democrática del carisma, como lo recuerda Weber, radica justamente en esto: el carisma no depende del escrutinio público, es una cualidad anterior al reconocimiento social que obtenga. Los sujetos que se orientan a través de liderazgos carismáticos, por lo tanto, no están preconstituidos frente a éste, sino que se constituyen a través de su presencia.

Asimismo, el "voto representativo" implica sujetos discursivamente orientados entre sí: el vínculo entre representantes y representados se valida a través de la palabra. Los representados se constituyen, en efecto, a través de un "voto de opinión": más que las personas, importan los programas. La eficacia de un representante, a su vez, radica enteramente en su capacidad de persuadir o de constituir opinión y, sobre todo, en su capacidad de "cumplir la palabra" empeñada frente a sus electores. El criterio de eficacia discursiva atraviesa todo modelo democrático que presupone, en último término, la factibilidad de constituir el mundo real a partir de la palabra o de traducir la palabra en hechos. La naturaleza del "voto plebiscitario" es completamente distinta: la tarea, e incluso la obligación de un líder plebiscitario no es persuadir, sino manifestarse, hacerse presente en medio de la comunidad de sus electores. El líder plebiscitario nunca se valida en términos discursivos: el mundo popular, en efecto, tolera perfectamente la demagogia en cuanto desconoce la pretensión de fundar lo real a partir de la palabra. La eficacia del liderazgo plebiscitario no descansa, pues, en su capacidad de realizar lo prometido, sino en su habilidad para generar identificación y reconocimiento público.

La importancia de la orientación plebiscitaria en el mundo popular admite pocas dudas: más que una elección, lo que importa es la aclamación de un líder y la búsqueda de unanimidad a través suyo. Los regímenes nacional-populistas estuvieron estrictamente fundados en un mecanismo de este tipo que siempre suscitó la adhesión popular: la participación política se limitaba a la aclamación de un candidato previamente designado y de antemano electo; por contrapartida, siempre resultaba imperdonable que el candidato no diera la ocasión de ser vitoreado pública y solemnemente. Este mecanismo no perdió su vigencia en los regímenes democráticos con competencia electoral abierta: también aquí la importancia de los líderes suele ser superior a la de los partidos y su presencia mucho más importante que su programa.

Esta importancia de la orientación plebiscitaria tiene como contrapartida la hostilidad popular hacia el sistema político. La crítica popular al sistema de partidos, sin embargo, no debe confundirse con autoritarismo. El síndrome autoritario está enteramente basado en un principio de eficacia discursiva: los políticos son "demagogos" incapaces de realizar sus promesas o de generar consensos que aseguran la gobernabilidad. El sistema político aparece entonces como un espacio de pura diferenciación e impotencia discursiva. Lo que caracteriza al síndrome autoritario, sin

embargo, no es exactamente la renuncia al principio de eficacia discursiva, sino su traslado al Estado como mecanismo capaz de realizar coactivamente el discurso, de disciplinar el uso de la palabra y, sobre todo, de otorgar validez empírica a lo dicho. El "voto autoritario" es, por consiguiente, una reacción contra el exceso de discurso en el doble sentido de exceso de hablantes y de desajuste entre las palabras y los hechos. Los regímenes autoritarios, en consecuencia, no sólo suprimen el sistema político y eliminan la diversidad discursiva, vale decir, la libertad de prensa y opinión, sino también rechazan los liderazgos plebiscitarios. El Estado se define contra la "demagogia" y anula paralelamente sus componentes carismáticos: su esfuerzo principal consiste en dotar al discurso de una eficacia empírica y normativa que no posee al interior del sistema político, y menos aún en manos de los líderes populistas.

El rechazo popular de la política, en cambio, tiene un fundamento completamente diferente: más que hostilidad, lo que predomina es la indiferencia, la ausencia de orientación a través del sistema de partidos. Aquí, la crítica principal no radica en la ineficacia discursiva del sistema, sino en el principio mismo que lo funda, vale decir, en su pretensión de constituir el mundo a partir de la palabra. El núcleo del planteamiento democrático —la formación discursiva de una voluntad general libremente constituida— no es puesto en cuestión por el exceso de participación que trae consigo, sino por la pretensión discursiva que lo acompaña. La crítica del sistema político como encarnación del principio de eficacia discursiva se desplaza al Estado, pero bajo la forma de un reclamo por liderazgos plebiscitarios. La demanda estatal no es una demanda por coherencia discursiva ni una reacción contra el exceso de discursos: el mundo popular, como a hemos dicho, tolera ampliamente la demagogia, el exceso declarativo, como en las cartas de amor cuyas promesas amorosas todo el mundo sabe que nadie cumplirá. Ocurre simplemente que un líder plebiscitario, como toda relación amorosa por lo demás, se valida fuera del discurso. La política, por lo tanto, sólo adquiere sentido como espacio de formación no discursiva de una voluntad general: fuera de este espacio cunde simplemente la desmovilización, la apatía o la indiferencia. Fuera de los marcos históricamente ofrecidos por los líderes plebiscitarios, el pueblo rara vez se interesa en política.

La desarticulación de los regímenes nacional-populistas, en manos de regímenes autoritarios primero, y de regímenes democráticos después, lleva consigo una obsolescencia del mecanismo plebiscitario que hemos descrito. La evolución política del continente ha consistido en desalojar el "voto plebiscitario", ya sea coactivamente a través de regímenes autoritarios, ya sea a través de la conformación de sistemas políticos fundados en el "voto representativo". Los procesos de democratización reposan, específicamente, en la probabilidad de transferir el principio de legitimidad política desde los liderazgos plebiscitarios hacia el sistema político. Todo indica, sin embargo, que nuestros sistemas políticos siguen adoleciendo de un déficit crónico de voto representativo. Las dificultades en este terreno no provienen tanto de una crisis de representatividad como de una crisis de legitimidad del sistema político. En el primer caso, encontramos un debilitamiento de la capacidad del sistema político para representar actores colectivos: los vínculos entre partidos y actores sociales (cuyo modelo fueron los partidos laboristas en las democracias avanzadas) se desdibujan al punto que los partidos dejan de legitimarse por su pertenencia de clase e, inversamente, los actores colectivos prescinden crecientemente de sus apoyos políticos para realizar sus intereses. En el marco de una sociedad de masas, sin formación



de actores colectivos, esta crisis de representatividad se traduce en la aparición de un "electorado oscilante" y de la abstención electoral: por una parte, las lealtades políticas de antaño desaparecen, aumenta la movilidad electoral y se generaliza una orientación puramente instrumental; por otra, los sujetos realizan sus intereses directamente en el mercado y se niegan a constituir representantes cuya eficacia instrumental resulta cada vez más incierta.

Estos síntomas –electorado flotante y abstención política– no aparecen exactamente en nuestro caso. El sistema político no es desbordado por un exceso de orientación de mercado y de comportamientos estratégicos, sino por un exceso de orientación hacia el Estado, que se realiza a través de liderazgos plebiscitarios. Lo que prevalece, al menos en las clases populares, es una movilización a través de carismas electorales que se sitúan en la frontera o derechamente fuera del sistema político. La resurrección del cardenismo mexicano a través de Cuauhtémoc y del aprismo peruano por medio de Alan García, la vitalidad del freismo chileno (que, como en el caso mexicano, aplica el criterio del carisma hereditario y da soporte político a su parentela), la vigencia del brizolismo brasileño (sobrepasado, no obstante, por un fenómeno enteramente nuevo, el Partido de los Trabajadores, PT, cuyos componentes populistas no responden al modelo clásico) muestran la vigencia del populismo de viejo cuño. A ello se agregan populismos nuevos, como el de Max Fernández y Palenque en Bolivia o Belmont y Fujimori en Perú, carismas electorales que se constituyen en gran medida por su excentricidad respecto del sistema político. El déficit de voto representativo adquiere, pues, esta forma específica: orientación sistemática y deliberada fuera de las estructuras discursivas de representación política.

Esta reaparición del populismo no está al abrigo, sin embargo, de una creciente banalización, sobre todo cuando se aproxima y constituye, como ocurre por doquier, desde la cultura de masas. El populismo parece haber perdido, en efecto, su cualidad propia: la capacidad de construir una identidad colectiva. Los liderazgos plebiscitarios no tienen la densidad del pasado, la lealtad popular es más versátil, los carismas políticos son puramente electorales y desaparecen sin dejar huellas significativas. La degradación del voto populista en voto de masas, definido como una simple demanda por protección estatal que se tramita fuera del sistema político, parece estar efectivamente en curso. La política, tanto representativa como plebiscitaria, ha dejado en nuestros días de ser un *ethos*, un lugar de constitución de la conciencia colectiva, el locus donde antaño se constituyó realmente un sujeto. Tal vez el populismo, esa gran máquina a través de la cual se transformaron masas en pueblo, se incline también ante el peso de sociedades que no reconocen otro mecanismo de coordinación que el mercado.

#### REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- CAPERO, A.  
1983 *Desde que grité: Viva Perú*. Buenos Aires: Pehuén Ediciones.
- DEBRAY, R.  
1961 «Revolución en la revolución». *Cuadernos de la Revista Casa de las Américas* (La Habana).
- DEGREGORI, C. I., C. BLONDET & N. LYNCH  
1986 *Conquistadores de un Nuevo Mundo*. Lima: IEP.

- DE IPOLA, E.  
1982 *Ideología y discurso populista*. México: Folios
- DI TELLA, T.  
1973 «Populismo y reformismo». En: O. Ianni, ed. *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*. México: ERA.
- DOS SANTOS, TH.  
1972 *Socialismo o fascismo*. Santiago: PLA.
- FLORES GALINDO, A.  
1988 *Buscando un inca*. Lima: Horizonte.
- GERMANI, G.  
1971 *Política y sociedad en una época de transición*. Buenos Aires: Paidós.  
1973 «Democracia representativa y clases populares». En: O. Ianni, ed. *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*. México: ERA.
- GOLTE, J. & N. ADAMS  
1987 *Los caballos de Troya de los invasores*. Lima: IEP
- IANNI, O.  
1973 «Populismo y relaciones de clase». En: *Populismo y contradicciones de clase en Latinoamérica*. México: ERA.  
1975 *La formación del Estado populista en América Latina*. México: ERA.
- LACLAU, E.  
1986 «Hacia una teoría del populismo». En: *Política e ideología en la teoría marxista*. México: Siglo XXI.
- MAGNET, A.  
1956 *Nuestros vecinos argentinos*. Santiago: Editorial del Pacífico.
- MATOS MAR, J.  
1988 *Desborde popular y crisis del Estado*. Lima: Concytec.
- MURMIS M. & J. C. PORTANTIERO  
1971 *Estudios sobre los orígenes del peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- RAMOS, S.  
1972 *Una economía de transición*. Santiago: CESO-PLA.
- STEIN, S & C. MONOE  
1988 *La crisis del Estado patrimonial en el Perú*. Lima: IEP
- TOURAINE, A.  
1989 *La Parole et le Sang*. Paris: Editions Odile Jacob. Traducción española: *América Latina: política y sociedad*. Madrid: Espasa Calpe, 1989.
- WEFFORT, F.  
1970 «State and Mass in Brazil». En: I. L. Horowitz, ed. *Masses in Latin America*. New York: Oxford University Press.  
1978 «El populismo en la política brasileña». En: *Brasil hoy*. México: Siglo XXI.